

INE/CG422/2025

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023
DENUNCIANTES: LUIS ENRIQUE SAINZ
PICOS
DENUNCIADO: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LUIS ENRIQUE SAINZ PICOS, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR SU PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA, ASÍ COMO POR EL SUPUESTO USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 8 de mayo de dos mil veinticinco.

G L O S A R I O

Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios	Ley General de los Medios de Impugnación en materia Electoral

LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Sistema	Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Unidad Técnica o UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral

R E S U L T A N D O

I. **DENUNCIA.** El 15 de agosto de 2023, se recibió en la UTCE, el oficio INE/JLE-SIN/VS/0574/2023¹, signado electrónicamente por el Asesor Jurídico de la Junta Local Ejecutiva del *INE* en Sinaloa, a través del cual remitió, entre otras CUESTIONES, el escrito de queja y sus anexos, signado por **Luis Enrique Sainz Picos**, mediante el cual denuncia haber sido indebidamente afiliado al Partido Revolucionario Institucional, utilizando para ello, sin su consentimiento, sus datos personales, anexando el comprobante de búsqueda con validez oficial y copia simple de su credencial para votar.

II. **Registro, reserva de admisión y de emplazamiento, diligencias de investigación.** El diez de octubre de dos mil veintitrés ², el Titular de la *UTCE*, ordenó formar el expediente respectivo como **procedimiento sancionador ordinario**, mismo que quedó registrado bajo la clave **UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023**.

¹ Visible a páginas 1 a la 5 del expediente.

² Visible a páginas 6 a 14 del expediente.

Asimismo, se reservó la admisión y lo conducente respecto al emplazamiento de las partes, hasta en tanto se culminará la etapa de investigación.

Por otro lado, con el propósito de allegarse de mayores elementos, la autoridad sustanciadora requirió al *PRI diversa* información y documentación relacionada con los hechos denunciados; se ordenó inspeccionar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos que administra la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de verificar que el quejoso se encontraba afiliado al PRI, y se instruyó a dicho partido político que diera de baja a la persona denunciante tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de su portal de internet o de cualquier otra base pública.
obteniéndose lo siguiente:

Sujeto requerido y/o actuación realizada	Respuesta / resultado de la diligencia
PRI	Ofreció oficio original PRI/REP-INE/309/2023 y el diverso CNARP/3697/2023 , con los cuales, afirma el denunciado, dar cumplimiento a lo ordenado anexando captura de pantalla del Sistema de Verificación de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, en la que consta la fecha de afiliación del quejoso (7/11/2020), la baja del padrón (18/10/2023), y el estatus del registro el cual aparece como cancelado con fecha 24 de octubre de 2023.
Inspección en el Sistema	19 de octubre de 2023 Se constató que el quejoso fue afiliado al PRI el 17 de noviembre de 2020.

III. Admisión y emplazamiento. El 4 de diciembre de 2024³, se admitió a trámite el procedimiento y se ordenó emplazar al *PRI* por la presunta afiliación indebida y el supuesto uso no autorizado de los datos personales de el quejoso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes., además se ordenó inspeccionar el **Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partido Políticos (SVPPAPP)**, al **sitio web del PRI e instrumentación de acta circunstanciada**. Dicho proveído se diligencio y notificó de la siguiente forma:

³ Visible a páginas 37 a 42 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023

Sujeto emplazado	Diligencias	Contestación al Emplazamiento
Inspección en el portal de Internet del PRI	Acta circunstanciada de 4 de diciembre de 2023	Se constató que el quejoso no se encuentra como afiliado del <i>PRI</i> en el sitio de internet
PRI	Notificación – Plazo Citatorio: 5 de diciembre 2023; 13:30 horas Notificación: 6 de diciembre 2023; 10:00 horas Plazo: 7 al 13 de diciembre de 2023	13/diciembre/2024 Señaló medularmente que la afiliación debatida fue voluntaria y, por tanto, no vulnera el derecho de libre afiliación del quejoso, quien consintió tanto ser incorporado al padrón de afiliados del denunciado, como el tratamiento de sus datos personales para ese fin. ⁴

IV. Vista y Alegatos. Mediante acuerdo de 11 de noviembre de 2024, a fin de respetar el principio de contradicción en materia probatoria, la Unidad Técnica ordenó dar vista a Luis Enrique Sainz Picos, con copia simple del “Formato Único de Afiliación o Refrendo” aportado en original por el denunciado, a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran y considerara oportunas, respecto a los hechos controvertidos.

De la misma forma, se ordenó poner el expediente a la vista de las partes a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. Dicho acuerdo se notificó de la manera siguiente:

Sujeto	Notificación / Plazo	Respuesta
PRI	Cédula: 12 de noviembre de 2024. Plazo: 13 al 19 de noviembre de 2024.	20/noviembre/2024 Escrito ⁵
Quejoso	Cédula: 14 de noviembre de 2024. Plazo: 15 al 21 de noviembre de 2024.	Sin respuesta

V. Verificación de estatus registral. El 10 de abril de 2025, la *UTCE* realizó la consulta al *Sistema* y corroboró que la persona inconforme fue dada de baja del padrón de militantes del denunciado, sin que hubiese sido reincorporada al mismo.

⁴ Escrito visible a páginas 54 a 62 del expediente

⁵ Visible a páginas 63 a 67 del expediente

VI. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente para que fuera sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión.

VII. Sesión de la Comisión. En su Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el 28 de abril de 2025, la Comisión analizó y aprobó el presente proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes y ordenó su remisión a este Consejo General para su aprobación definitiva, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

Este *Consejo General* tiene competencia para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y), de la *LGPP*, con motivo de la probable transgresión al derecho de libre de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del denunciado, en perjuicio de las personas quejasas.

En consecuencia, siendo atribución de este *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PRI*, derivado, esencialmente, de la vulneración al derecho de libertad afiliación y la utilización indebida de datos personales de la persona quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁶ en el sentido de que esta autoridad

⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos a los partidos políticos.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

1. Materia del procedimiento

En principio es preciso señalar que el quejoso manifestó desconocer su afiliación al partido denunciado, medularmente porque, a su decir, no prestó su consentimiento para ser incorporado como militante del *PRI*, ni para que sus datos e información personal fueran usados con dicha finalidad.

Por su lado, el partido político negó haber afiliado indebidamente al quejoso ni haber usado sus datos personales sin justificación, bajo el argumento de que dicha persona voluntariamente presentó fotocopia de su credencial para votar y procedió al llenado del formato de afiliación correspondiente, a través del cual manifestó libre interés de ser inscrito en el padrón de afiliados del denunciado y, que a la fecha, el denunciante ya no se encuentra registrado en el padrón de afiliados del *PRI*.

Por último, arguye que no existe prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, por lo cual, el derecho de presunción de inocencia, se erige como principio esencial de todo Estado Constitucional Democrático de Derecho, con lo cual se puede concluir que no es factible sustentar la infracción y la sanción que se le pretende aplicar.

En las condiciones anotadas, la materia de procedimiento se constriñe a determinar si el *PRI* vulneró el derecho de libre afiliación —en su vertiente **positiva**— de la persona denunciante, en contravención a lo dispuesto en artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), 25, párrafo 1, incisos a), e), e y) y 29 de la *LGPP*; o si, por el contrario, la afiliación debatida se apegas al marco normativo vigente.

2. Marco normativo

A. Constitución, leyes y acuerdos

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35,

fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.⁷

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, Base I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

De esta forma, toda persona ciudadana mexicana tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos; afiliarse o desafiliarse libre e individualmente a ellos; o no pertenecer a ninguno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, Bases I, párrafo segundo, parte final, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.⁸

Así las cosas, el *Tribunal Electoral*, en la Tesis de Jurisprudencia **24/2022**, de rubro *DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES*.⁹ ha establecido, el contenido y alcances del Derecho de afiliación que, en esencia, comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral, además de la normativa estatutaria de cada partido político, en tanto una de las obligaciones que deben cumplir, en términos del artículo 25, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, estriba en *cumplir sus normas de afiliación*.

Por otro lado, la *Sala Superior*, a través de diversas sentencias¹⁰ sostuvo que correspondía a los partidos políticos el probar que una persona expresó su voluntad de afiliarse, a través de la constancia de inscripción respectiva, es decir, el documento que contenía la expresión manifiesta de pertenecer a un partido político;

⁷ Véase Tesis de Jurisprudencia 25/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁸ Véase Tesis de Jurisprudencia 25/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁹ Consultable en: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹⁰ Véase SUP-RAP-1107/2017, SUP-RAP-614/2017 y SUP-RAP-139/2018

criterio que, a la postre, dio origen a la tesis de jurisprudencia **3/2019**, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**.

Por su parte, la *LGPP* establece, entre otras cuestiones, las obligaciones de los partidos políticos de registrar a su militancia; en efecto, en los artículos 29 y 30, de dicho ordenamiento, se prevé el deber de los institutos políticos de llevar a cabo este registro; así como del deber de garantizar la protección de los datos personales de sus integrantes.¹¹

Por otra parte, cabe señalar que el *INE* emitió los “Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro y su publicidad, así como para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral”.

En tal documento se estableció el deber de los institutos políticos nacionales de capturar de manera permanente los registros de sus militantes en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados, además de que la información ahí reportada debería coincidir con la solicitud de afiliación; debiéndose asentar datos como nombre de la persona, clave de elector, sexo, la entidad y la fecha de registro.

Posteriormente el *INE* emitió el acuerdo INE/CG33/2019, en el que, de manera excepcional, permitió que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, implementándose el “procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados a los Partidos Políticos Nacionales”, a través del cual los partidos políticos estaban obligados a revisar y depurar su padrón de militantes, al verificar que contaran con las cédulas de afiliación o, en su caso, debían darlos de baja del registro.¹²

Sobre esto último, debe señalarse que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019, **el plazo para llevar a cabo las actividades del procedimiento de revisión, actualización y sistematización** de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, **sería el comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

No obstante, **el procedimiento** de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales **fue dividido por etapas y fechas de inicio y fin**, conforme a lo siguiente:

¹¹ Véase numeral 28 (visible en la página 9) de la sentencia dictada por la *Sala Superior* en el expediente SUP-RAP-264/2022, consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2022/RAP/264/SUP_2022_RAP_264-1175193.pdf

¹² Ibid. numerales 31 y 32

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023

ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	
			Inicio	Fin
AVISO DE ACTUALIZACIÓN	Publicitar actualización de padrones	PPN	01/02/2019	31/01/2020
	Publicar leyenda "EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN"	INE	01/02/2019	31/01/2020
	Informe conclusión de etapa	INE	01/02/2020	28/02/2020
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN	Baja definitiva de las personas que interpusieron queja por indebida afiliación previo a la aprobación del Acuerdo	PPN	01/02/2019	31/03/2019
	Baja definitiva de registros por indebida afiliación presentada posterior a la aprobación del Acuerdo	PPN	10 días hábiles	
	Identificación de registros con documentación soporte de afiliación	PPN	01/02/2019	31/07/2019
	Publicación de los registros en reserva	PPN	01/02/2019	31/07/2019
	Notificación al INE de registros en reserva	PPN	5 días hábiles de cada mes Mar-Ago	
	Actualizar padrones de los PPN con registros en reserva	INE	5 días hábiles posterior a la notificación	
	Informe conclusión de etapa	INE	01/08/2019	31/08/2019
RATIFICACIÓN	Aprobar mecanismos para ratificación y refrendo de militancia, en caso de haberlo	PPN	01/02/2019	31/12/2019
	Informar a la militancia proceso de ratificación y refrendo	PPN	01/02/2019	31/12/2019
	Recabar documentación que acredite la afiliación	PPN	01/02/2019	31/12/2019
	Informar registros que ratificaron o refrendaron su militancia	PPN	01/03/2019	31/12/2019
	Actualizar padrones de los PPN en función de los registros refrendados	INE	01/03/2019	31/12/2019

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023

ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	
			Inicio	Fin
	Cancelar registros en reserva de los que no se obtenga documentación soporte	PPN	01/03/2019	31/12/2019
	Informe conclusión de etapa	INE	02/01/2020	31/01/2020
CONSOLIDACIÓN	Ajustes finales al padrón de afiliadas y afiliados	PPN	02/01/2020	31/01/2020
	Informar respecto de la cancelación de registros en reserva de los que no se obtuvo documentación soporte de afiliación	PPN	09/01/2020	31/01/2020
	Apercibir respecto de los registros en reserva	INE	31/01/2020	31/01/2020
	Informe final	INE	01/02/2020	29/02/2020

De lo anterior y conforme a lo establecido en el acuerdo **INE/CG33/2019**, se obtiene el procedimiento siguiente:

- 1. REVISIÓN.** Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve los partidos políticos llevaron a cabo la revisión de la documentación soporte de la totalidad de las y los afiliados a estos.¹³
- 2. RESERVA.** Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, los partidos debían reservar los registros como militantes, de aquellas personas **respecto de las cuales no tuvieran cédula de afiliación** o documento que acredite la voluntad, aun cuando no se hubieren presentado quejas por indebida afiliación.¹⁴

Esto es, el **treinta y uno de julio de dos mil diecinueve** venció el plazo para que los partidos reservaran los registros de afiliación con los que **a esa fecha contaban.**
- 3. RATIFICACIÓN.** A más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos realizaron el procedimiento de ratificación o refrendo de la militancia, **respecto de todos aquellos registros**

¹³ Considerando 12, numeral 2, con relación al numeral 2.2, del acuerdo INE/CG33/2019.

¹⁴ Considerando 12, numeral 2, con relación al numeral 2.2, inciso b), del acuerdo INE/CG33/2019.

clasificados como reservados dado que no cuentan con cédula de afiliación.¹⁵

Esto es, si bien a más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos podían recabar una cédula de afiliación que acredite la debida afiliación de sus militantes, lo cierto es que **dicho plazo solo resulta aplicable para aquellos registros reservados al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.**

Conforme a lo anterior, se obtiene la premisa siguiente:

- 4. REGISTROS POSTERIORES AL 31 DE JULIO DE 2019.** Al tratarse de registros que al treinta y uno de julio de dos mil veintidós, no se encontraban en los padrones de los partidos políticos, estos no fueron reservados, por tanto, se trata de **registros nuevos**¹⁶ que, para llevarlos a cabo, debieron contar a esa fecha con la respectiva cédula de afiliación.¹⁷

Lo anterior, puede ilustrarse en la siguiente línea de tiempo:

¹⁵ Considerando 12, **numeral 2**, con relación al **numeral 3**, del acuerdo INE/CG33/2019.

¹⁶ Considerando **13** del acuerdo INE/CG33/2019: **13. Las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los refrendos o ratificaciones deberán incluir elementos mínimos, a fin de que puedan demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía**, a saber: nombre completo, clave de elector, **fecha de afiliación**, domicilio completo y la manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, además deberán contener los requisitos que establezca la normatividad interna de cada PPN. Adicionalmente, el INE desarrollará una aplicación móvil que permita a los partidos políticos obtener nuevas afiliaciones, ratificaciones o refrendos, de su militancia. Lo anterior, automatizará el procedimiento de afiliación, ratificación o refrendo, además de que el INE resguardará un archivo digital de ello en un expediente electrónico; sin que esto exima al PPN de la obligación de conservar el documento (físico o digital) que acredite la debida afiliación, refrendo o ratificación en virtud de que los PPN son los sujetos obligados del cuidado y manejo de los datos que obran en sus padrones de afiliadas y afiliados. (...)

¹⁷ Considerando 12, **numeral 3**, con relación al **numeral 3**, del acuerdo INE/CG33/2019: **De obtener la manifestación de voluntad de la persona ciudadana en el sentido de que si estaba afiliada al partido político y ésta se manifieste por escrito o a través de la aplicación móvil, entonces deberá proceder la ratificación de la militancia con la fecha de afiliación asentada en el padrón —verificado por el Instituto en 2017 y actualizado de forma permanente por los partidos políticos— publicado en la página del INE con corte a la fecha de aprobación de este Acuerdo.**

LÍNEA DE TIEMPO PARA LA OBTENCIÓN DE FORMATO DE AFILIACIÓN



3. Consideraciones similares sostuvo este Consejo General en la resolución INE/CG470/2022, que resolvió el procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/IPP/JD11/MICH/42/2021, la cual fue confirmada por Sala Superior mediante sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, al resolver el SUP-RAP-264/2022.

B. Normativa interna del PRI

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

En lo que atañe al caso, el estatuto del *PRI* prevé, en sus artículos 22, 23, 24, 58, 60 y 99, que toda persona ciudadana en pleno goce de sus derechos políticos puede solicitar su incorporación como militante del partido político, de manera individual, personal, intransferible, libre y pacífica; y que, para que dicha solicitud resulte procedente, la persona solicitante deberá haber sido adherente por al menos dos años y obtener el dictamen de procedencia correspondiente, de los órganos partidistas competentes.¹⁸

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

¹⁸ Estatuto consultable en: <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-PRI.pdf>

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PR* podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadana o ciudadano mexicano y **expresar su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

C. Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones *si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser*

pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.

4. Hechos acreditados

Como se ha mencionado, la persona denunciante alegó la supuesta vulneración a su derecho de libertad de afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación— bajo el argumento de que fue incorporada como militante del *PRI*, sin haber otorgado su consentimiento para ello, ni para la utilización de sus datos personales con esa finalidad.

En torno a ello, cabe destacar, por una parte, que la *Unidad Técnica* realizó la inspección al *Sistema*, obteniendo que el quejoso efectivamente fue encontrado en el padrón de militantes del denunciado, información que fue corroborada por el propio denunciado.

Finalmente, el partido político señaló que la afiliación debatida **fue voluntaria**, lo mismo que el tratamiento de los datos e información personal de la ocurrente, aportando para comprobar su dicho, el original de la cédula de afiliación respectiva, misma que no fue controvertida por el quejoso, aun cuando tuvo la oportunidad procesal para hacerlo, puesto que la Unidad Técnica le dio vista de ella, sin que se presentara objeción alguna respecto a su veracidad y contenido.

En este sentido, cabe destacar que las pruebas documentales públicas tienen valor probatorio pleno, con arreglo a lo previsto en los artículos 461 de la LGIPE y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE; mientras que las documentales privadas únicamente harán prueba plena en cuanto a los hechos a los que se refiere cuando, al concatenarse con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), y 462, párrafos 1 y 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II; y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas. En el caso, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentos privados que **hacen prueba plena**; pues generan convicción sobre los hechos denunciados, al concatenarse con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de los denunciantes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los extremos de los artículos citados anteriormente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023

Establecido lo anterior, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la materia de controversia, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación implementada, así como las conclusiones que, para el caso, fueron advertidas:

Denunciante	Fecha de afiliación (cédula)	Fecha de afiliación (sistema)	Fecha de baja (sistema)
Luis Enrique Sainz Picos	5 de agosto de 2015 (afiliación) 8 de agosto de 2020 (refrendo)	17 de noviembre de 2020	24 de octubre de 2023

Así, de acuerdo con la información obtenida de las pruebas mencionadas y sistematizada en el cuadro anterior, se pueden obtener las **conclusiones generales** siguientes:

1. No existe controversia en el sentido que el quejoso, **fue registrado como militante del partido denunciado.**
2. En el caso, la fecha de afiliación que aparece en la cédula o formato aportado por el partido político para demostrar la veracidad de sus afirmaciones es coincidente con la fecha de afiliación asentada en el sistema.
3. El quejoso no objetó ni controvertió en modo alguno la autenticidad y contenido de la cédula de afiliación exhibida por el PRI, por lo que se mantiene incólume su valor y eficacia probatoria.

Acreditado lo anterior, en el siguiente apartado se procederá a detallar la información asentada en cada una de las conclusiones señaladas, así como a determinar, si para su inclusión en el padrón de militantes del PRI, medió o no su consentimiento y, por ende, si el uso de sus datos personales para tal fin fue conforme a derecho, dado que en ello estriba el fondo del presente asunto.

5. Caso concreto

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por parte de las personas involucradas, es preciso subrayar que, de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de Resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varias décadas, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de

esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde a la parte promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra del denunciado (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a las partes denunciantes.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIFE*, en tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las y los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a éstos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

A partir de lo expuesto, de la información obtenida del *Sistema* y de la proporcionada por el partido político denunciado, es válido concluir, por una parte, que la persona quejosa se encontró afiliada al *PRI*, circunstancia sobre la que no existe controversia; y por otra, que dicha afiliación fue voluntaria, en la medida en que el partido político procedió a demostrar con medios de prueba idóneos, suficientes y no desvirtuados, que la militancia controvertida es el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de la parte denunciante, expresada mediante su firma autógrafa en la cédula aportada por el partido político, junto con la copia simple de la credencial para votar de la denunciante.

En efecto, en este caso la carga de la prueba corresponde al partido político denunciado, toda vez que afirmó la militancia cuestionada era voluntaria, no así a la denunciante, cuya pretensión se sustenta en la negativa de haber consentido su afiliación al partido político, pues al tratarse de un hecho negativo (la falta de consentimiento), en principio no es objeto de prueba.

Así, en el caso, se observa que **la fecha de afiliación estampada en la cédula de afiliación aportada por el partido político denunciado es idéntica a la contenida en el *Sistema***, por lo que, a consideración de este Consejo General, resultan suficientes para demostrar la voluntad del denunciante para ser incorporado como militante, sin que éste objetara su contenido y alcance, además de que se obtuvo en términos de lo establecido en el acuerdo INE/CG33/2019, por lo que se considera inexistente la infracción denunciada.

Lo anterior es así porque la *Sala Superior* ha sostenido, a través de la jurisprudencia **3/2019**, de rubro *DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO*, que si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político**. De lo anterior se sigue que el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

En el caso, el *PRI* aportó a la controversia la cédula de afiliación del quejoso, la cual, entre otras cuestiones, muestra el nombre, clave de elector y firma autógrafa del inconforme la cual, aun siendo una documental privada que no tiene *per se* una eficacia demostrativa plena, apreciada en su contexto y concatenada con el acervo probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la

sana crítica, así como las máximas de la experiencia, lleva a esta autoridad electoral a otorgarle eficacia demostrativa para tener por lícita la afiliación discutida, máxime que la misma no fue objetada por la persona quejosa, de manera que no existe prueba en contrario de su validez y contenido, por lo que su licitud debe presumirse, conduciendo a la **inexistencia** de la infracción denunciada.

Es por ello que, **se tiene por no acreditada la infracción** en el procedimiento sancionador ordinario, consistente en la supuesta violación al derecho político de libre afiliación de **Luis Enrique Sainz Picos**, por los argumentos antes expuestos.

Finalmente, más allá de que se tiene por no acreditada la infracción imputada al *PRI*, es importante precisar que la persona quejosa, en su oportunidad, fue dada de baja del padrón de afiliados de partido político denunciado, como se advierte de lo manifestado por el propio instituto político, de lo obtenido en el *Sistema* y de lo verificado por la *UTCE*.

TECERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de **Luis Enrique Sainz Picos**, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

¹⁹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por Tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL**."

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LESP/JLE/SIN/71/2023

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

NOTIFÍQUESE: Personalmente a Luis Enrique Sainz Picos; al Partido Revolucionario Institucional, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y por **estrados** a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de mayo de 2025, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaña Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; no estando presentes durante el desarrollo de la sesión, los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Maestro Jaime Rivera Velázquez.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL**

**LA SECRETARIA DEL
CONSEJO GENERAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI
ZAVALA**

**DRA. CLAUDIA ARLETT
ESPINO**